

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Impulsar el Desarrollo Productivo Sostenible



CRÉDITOS

DOCUMENTO: Impulsar el Desarrollo Productivo Sostenible
Unidad de Desarrollo Productivo Sostenible
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
DISEÑO: Unidad de Comunicaciones
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Marzo 2026

La relevancia del Desarrollo Productivo Sostenible

Durante más de una década, Chile ha visto caer su crecimiento tendencial y el estancamiento de la productividad, mientras la triple crisis ambiental impulsada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación redefine las reglas de acceso a los mercados y aumenta los conflictos socioambientales ligados a la explotación de recursos.

Este contexto presiona al país a modernizar y hacer más eficiente su matriz productiva, pero también abre una oportunidad histórica: reposicionar nuestra economía a través del conocimiento, la tecnología e innovación, aprovechando las ventajas que ofrece la transición energética global.

Así, se ha avanzado hacia un desarrollo productivo que impulse el crecimiento sin profundizar el deterioro ambiental; construyendo una matriz que agregue valor, genere empleos de calidad y asegure altos estándares de sostenibilidad en los territorios. Esto ha permitido superar aquellos enfoques que estaban basados sólo en la extracción. Esta evolución permitirá recuperar mayores tasas de productividad y crecimiento, dimensiones clave para mejorar la calidad de vida de la población.

Acelerar la innovación, la adopción tecnológica y el desarrollo de aquellas industrias emergentes vinculadas a la transición energética, resulta fundamental. Para avanzar en esta materia, las principales economías del mundo han implementado políticas industriales que establecen áreas estratégicas de trabajo, objetivos claros e instrumentos específicos.

Es por esto que se deben implementar medidas para facilitar el desarrollo de industrias donde se tenga ventaja, como el litio, hidrógeno verde, data centers o energías renovables, pero apalancando el desarrollo de capacidades tecnológicas y de actividades a lo largo de sus cadenas de valor, como servicios asociados y manufactura de insumos. Esto representa un norte claro y una oportunidad significativa para atraer inversión, diversificar la economía y generar empleos de mayor calificación en nuestro país.



SITUACIÓN INICIAL

1. Desaceleración sostenida del crecimiento económico, junto con la baja diversidad y sofisticación de la matriz productiva nacional

Durante los últimos años, Chile ha experimentado una caída sostenida en su ritmo de crecimiento tendencial¹. Mientras en 2011 la economía se expandía a tasas cercanas al 5%, desde 2012 la actividad se desaceleró de manera persistente, alcanzando solo un 2% de crecimiento en 2023. El Banco Central ha mantenido a la baja su estimación de crecimiento tendencial, proyectando 1,8% anual para 2025-2034.

Esta trayectoria se explica, principalmente, por el debilitamiento de la Productividad Total de Factores (PTF), que pasó de crecer sobre 2% anual en los años noventa a promediar una variación negativa en la última década.

La concentración de la actividad económica en un número reducido de sectores, con un papel preponderante de aquellos basados en recursos naturales con bajos niveles de valor agregado, genera dificultades para el crecimiento.

Por un lado, resulta cada vez más difícil seguir aumentando la productividad en un grupo acotado de sectores que presentan límites naturales. Por otro, se observa un estancamiento en la diversidad y en los volúmenes de productos exportados, sin que surjan nuevos motores de crecimiento.

La dependencia en actividades primarias se ilustra con la minería, que representa en promedio 10% del producto nacional (cerca del 20% indirectamente), con el cobre representando aproximadamente el 90% de la actividad minera.

2. Un financiamiento insuficiente para la investigación, el desarrollo y la innovación

A esto se suma una brecha persistente en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

A pesar de múltiples esfuerzos institucionales, Chile invierte apenas un 0,41% del PIB en I+D, una fracción del promedio OCDE (2,7%)². Esta baja inversión en conocimiento limita la capacidad de adoptar tecnologías avanzadas, generar nuevos sectores o sofisticar las industrias existentes.

Como resultado, el país se ubica en el puesto 78 de 133 en el Índice de Complejidad Económica, un nivel relativamente bajo para su nivel de ingresos y con escaso dinamismo reciente.

¹ En 2017 el Banco Central estimaba un crecimiento tendencial del 3,2%, y en 2024 su estimación se redujo a un 1,8%. Ver "Crecimiento tendencial: proyección de mediano plazo y análisis de sus determinantes" (2017) y el Informe de Política Monetaria de septiembre de 2024.

² Estadísticas de Gasto en I+D, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2023) y Encuesta de Gasto y Personal en Investigación y Desarrollo (I+D) del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación – Instituto Nacional de Estadística (2023).

3. Nuevas oportunidades vinculadas a la transición energética

El país cuenta con ventajas comparativas en energías renovables y minerales críticos, que son elementos clave para la transición energética global: la radiación solar del norte y los vientos patagónicos nos sitúan entre los lugares con menor costo de energías limpias del mundo, habilitando industrias emergentes como el hidrógeno verde.

En paralelo la creciente demanda por cobre, litio y otros minerales abre espacio para mayor valor agregado, expansión productiva con altos estándares socioambientales y desarrollo tecnológico local. En algunos sectores ya se ha avanzado, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. No obstante, las herramientas generales a disposición del Estado resultan insuficientes para aprovechar y acelerar estas oportunidades.

Actualmente, existen brechas institucionales y de política pública que requieren ser abordadas mediante nuevos mecanismos de fomento, regulación y coordinación estratégica. Esto es especialmente relevante en industrias como la del hidrógeno, donde fuertes incentivos de otros países podrían distorsionar el mercado y reducir el rol que tendrían países con ventajas naturales como Chile.



AVANCES DEL GOBIERNO

1. Nueva institucionalidad: Comité Interministerial

El Comité Interministerial para el Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), creado en enero de 2023, es la instancia central de coordinación y definición de directrices del Estado en materia de desarrollo productivo, cuyo objetivo es revitalizar el crecimiento económico y orientar la economía hacia la sostenibilidad mediante mayor innovación y tecnología.

Presidido por el Ministerio de Economía e integrado por Hacienda, Minería, Energía, Medio Ambiente, Ciencia y la vicepresidencia de Corfo, el Comité diseñó la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible, que busca superar la actuación aislada de los ministerios sectoriales y establecer una visión común, garantizando así una acción efectiva, coherente y de largo plazo frente a los desafíos productivos y ambientales del país

2. Programa de Desarrollo Productivo Sostenible

El Programa Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) es el brazo operativo de la nueva institucionalidad y su función es financiar, coordinar y monitorear los esfuerzos de transformación productiva de diversas instituciones públicas, basadas en los lineamientos del Comité a través de una Secretaría Ejecutiva radicada en la División DPS del Ministerio de Economía.

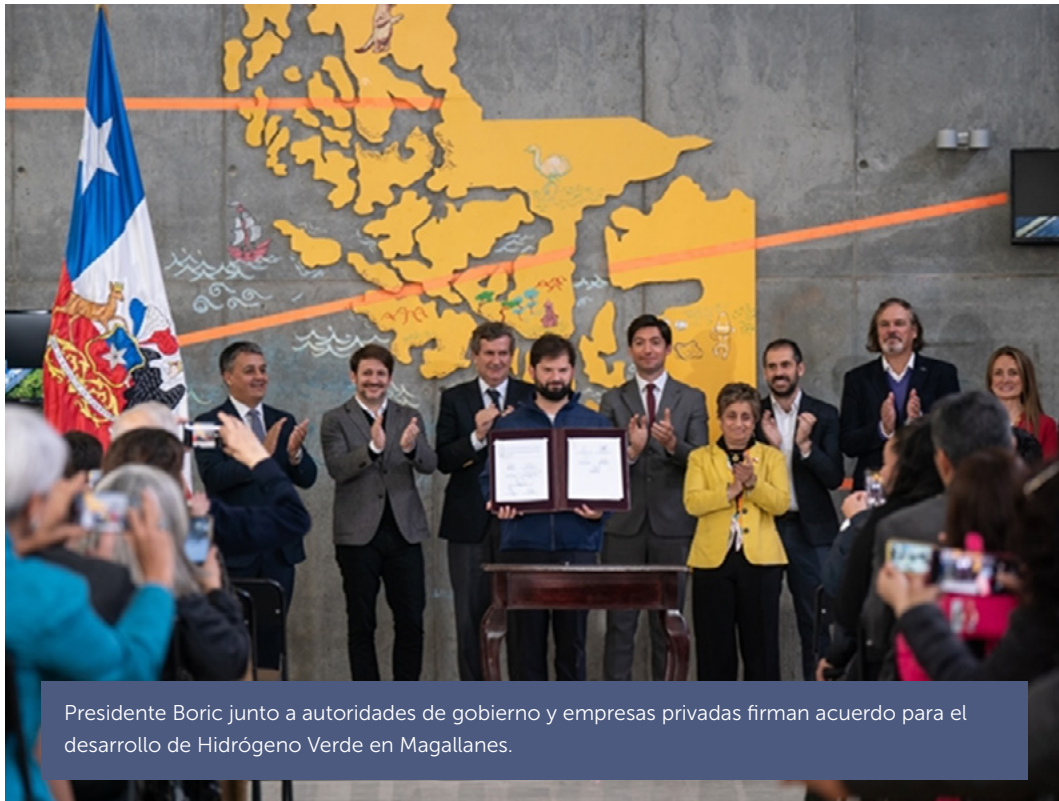
Sus objetivos estratégicos son: impulsar una descarbonización justa; fortalecer la resiliencia frente a la triple crisis ambiental; promover una economía más sofisticada y diversificada, que genere empleos de calidad e integre capacidades para implementar este tipo de políticas; y, que el enfoque de género sea un eje transversal y la descentralización un pilar central.

De forma conjunta, estos objetivos buscan impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas del país, y con esto lograr un crecimiento sostenido de la economía, en términos medioambientales y sociales, a través de la incorporación de más conocimiento y tecnología en los procesos productivos.

Entre 2023 y 2026, el Programa DPS contempla una inversión pública total de \$470 mil millones. En tanto, en sus primeros tres años, DPS logró apalancar cerca de \$240 mil millones adicionales en inversión desde el sector privado y universidades.

Los recursos se distribuyen mediante tres vías principales: convocatorias de instrumentos existentes focalizadas en los objetivos del programa (de Corfo, ANID y Sercotec); convenios de colaboración con Gobiernos Regionales para cofinanciar iniciativas de desarrollo de capacidades tecnológicas en áreas en que hay coincidencia en los objetivos; e iniciativas ad hoc implementadas por distintas instituciones para resolver problemas específicos, que van desde la generación de datos de patentes hasta el desarrollo de consultas indígenas.

En sus primeros tres años de ejecución se han puesto en marcha más de 210 iniciativas que benefician a más de 4.200 personas y empresas, de las cuales 4 de cada 5 son Mi-Pymes.



El programa ha destinado recursos estratégicos a áreas clave: en torno a \$30.000 millones a la industria del hidrógeno verde, cerca de \$12.000 millones al desarrollo del litio, en torno a \$36.000 millones a economía circular y alrededor de \$46.000 millones a proyectos de recursos hídricos.

Además, se ha puesto énfasis en la modernización tecnológica, invirtiendo en torno a \$36.000 millones en Industria 4.0 y \$22.000 millones en biotecnología. Este enfoque sistémico ha permitido financiar 143 convocatorias focalizadas y apoyar a más de 390 equipos científicos.

En términos generales, entre 2023 y el 2025, el Programa DPS significó:

- **Cartera de ejecución:** 210 iniciativas, 143 convocatorias y 1.800 proyectos.
- **Beneficiarios y ejecutores:** 4.200 personas y empresas beneficiarias. 1.143 empresas ejecutoras, de las cuales 4 de 5 son MiPymes. Más de 390 equipos científicos y 32 universidades como ejecutores.
- **Recursos para los Objetivos Estratégicos del programa:** Inversión de \$120.400 millones para descarbonización justa, cerca de \$101.000 millones para resiliencia y \$78.000 millones para sofisticación y diversificación.
- **Principales actividades financiadas:** En torno a \$46.000 millones para recursos hídricos, \$42.000 millones para el fomento del sector servicios y \$68.000 millones para proyectos de transporte y almacenamiento.
- **Principales temáticas financiadas:** Electromovilidad: \$67.000 millones, H2V: \$30.00 millones y Economía Circular: \$36.000 millones.

El programa DPS ha demostrado ser un nuevo marco institucional eficaz, a través del que las instituciones públicas pueden coordinarse y generar sinergias para enfrentar desafíos productivos a gran escala, contribuyendo a maximizar el impacto de los esfuerzos del país en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo productivo.

3. Hidrógeno Verde

El hidrógeno verde se ha posicionado como uno de los pilares estratégicos de la transición energética global. Chile posee condiciones excepcionales para desarrollar esta industria gracias a su abundante radiación solar en el norte y recursos eólicos de clase mundial en la Patagonia, que ubican a estas regiones entre las que tendrían los menores costos de producción del mundo.

En este escenario, avanzar de manera temprana permitirá consolidar la posición del país y desarrollar esta industria. Por ello, el rol del Estado como articulador, habilitador y promotor se vuelve decisivo.

Los esfuerzos del país comenzaron con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en 2020 y se consolidaron con el Plan de Acción 2023-2030, publicado en 2024, el cual está en sintonía con la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible. Este plan define medidas e instituciones responsables en áreas que incluyen desarrollo tecnológico, infraestructura habilitante, estándares y regulaciones, capital humano y encadenamientos productivos.

Recientemente se publicó la actualización de la Estrategia Nacional de H2V. En esta se ajustan los objetivos en consonancia con la velocidad de desarrollo de la industria a nivel global, pero destacando que Chile tiene ventajas comparativas y potencial para ser un actor relevante.

Algunos de los principales avances del Ministerio de Economía, que representan una inversión de alrededor de \$30.000 millones canalizada a través del Programa DPS entre 2023 y 2025, incluyen:

- **Incentivo tributario:** Mecanismo fiscal por US\$2.800 millones (actualmente en segundo trámite constitucional en el Congreso) diseñado para fomentar la demanda local por hidrógeno verde y sus derivados. El proyecto generará tres impactos importantes: encadenamientos productivos nacionales por el uso de hidrógeno generado en el país, una reducción en las emisiones de la economía nacional, y lo más importante, acelerará el despliegue de la industria. En la actualidad, a nivel global, la industria está a la espera de la reducción de la brecha entre costos de generación y disposición a pagar. Reduciendo temporalmente esos costos, el proyecto busca habilitar contratos de compra de hidrógeno de largo plazo, que son el elemento faltante para que los grandes proyectos de generación tomen sus decisiones de inversión y los proyectos se materialicen.
- **Reforzamiento para agilizar la evaluación técnica de los proyectos:** Para reducir la incertidumbre y agilizar el avance de las inversiones en la industria, el Ministerio de Economía ha comprometido cerca de \$900 millones en la contratación de funcionarios dedicados prioritariamente a la tramitación de proyectos de H2V en servicios públicos críticos, para agilizar procesos sin reducir los estándares.



Esto ha permitido que los primeros proyectos de H2V en Magallanes y Antofagasta obtengan sus Resoluciones de Calificación Ambiental sin demoras.

Para 2026, el reforzamiento se enfocará en los servicios relevantes para los respectivos permisos sectoriales, complementando las modernizaciones y agilizaciones que serán implementadas en el marco de la Ley de Permisos Sectoriales.

- **Generación de información:** Se desarrollaron dos proyectos inéditos para el país. En primer lugar, se trazaron líneas de base públicas e información ambiental que permitirá orientar decisiones de inversión, y los instrumentos de planificación territorial.

Junto con esto, se diseñó y financió un proyecto con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) para la generación de información tecnológica sobre esta industria a partir de datos de patentes.

- **Plan de Trabajo de Regulaciones:** Junto al Ministerio de Energía, y levantando información relevante desde los sectores económicos, se diseñó una hoja de ruta clara para las diversas modificaciones normativas y reglamentarias que son necesarias para la operación de esta nueva industria.

- **Subsidios para el uso y adopción de Hidrógeno Verde:** Se han comprometido más de US\$112 millones —US\$57 millones de aporte público y US\$55 millones del sector privado— en Programas Tecnológicos y otras medidas para impulsar la demanda local y desarrollar capacidades tecnológicas.

Estos recursos apoyan proyectos en fertilizantes para la agroindustria, aplicaciones logísticas, ensamblaje de vehículos, producción de e-fuels a partir de residuos forestales, mezclas de hidrógeno con gas natural en minería, fabricación y ensamblaje de electrolizadores y nuevos procesos de fundición y refinación de cobre.

- **Fabricación de electrolizadores:** A través de Corfo, se realizó un llamado para apoyar proyectos de fabricación y ensamblaje de electrolizadores, comprometiendo un aporte por US\$26 millones, y cerca de US\$24 millones de cofinanciamiento por parte de los ejecutores de los proyectos.
- **Facilidad Financiera:** Los proyectos de H2V son intensivos en capital y con alta incertidumbre. Para viabilizarlos, se creó una infraestructura financiera que entregará préstamos y coberturas para mitigar riesgos, financiada con préstamos de bancos multilaterales —como el BID y Banco Mundial— y aportes de Corfo, con una disponibilidad inicial de aproximadamente US\$1.100 millones y un potencial de apalancamiento de inversión de US\$12.500 millones. Adicionalmente, se modificó el Crédito Verde de Corfo para apoyar proyectos de hidrógeno en etapas de preinversión.
- **Desarrollo de capacidades de operación para técnicos:** Para atender los requerimientos de fuerza laboral capacitada, se han desarrollado distintas iniciativas. Por ejemplo, desde Corfo se implementaron programas de formación especializada en montaje, instalación y mantenimiento de sistemas de energía eólica. También desde DPS se financió la adquisición de electrolizadores para su instalación en universidades y liceos técnicos de tres regiones del país, que han permitido a capacitar y certificar a jóvenes de liceos técnico-profesionales en temas de operación de tecnologías de producción de H2V.

En paralelo, en 2023 se firmó el Pacto de Magallanes, un acuerdo público-privado inédito, orientado a impulsar el desarrollo sostenible de la industria del hidrógeno verde en la Región de Magallanes, en el que participan el Gobierno Regional, el Gobierno Central y los desarrolladores de proyectos. Su objetivo es desarrollar acciones complementarias desde el Estado y los privados para avanzar en distintas dimensiones, incluyendo la formación de personas, el desarrollo de proveedores, la innovación, y la infraestructura compartida.

A dos años de su firma, entre sus principales logros se encuentran:

- **Desarrollo de proveedores**
 - › **Iniciativas de Fomento Integradas (IFI) de Corfo:** Para impulsar el desarrollo de proveedores nacionales para la industria, se comprometieron aproximadamente US\$2,5 millones para subsidiar la inversión de potenciales proveedores de la industria en Magallanes, en nichos que fueron identificados en un estudio elaborado en el marco del Pacto.

- › **Metas de contratación preferente:** Como parte de los compromisos del Pacto, al menos una de las empresas participantes publicará prontamente sus metas de contratación preferente de proveedores y personas locales.
- **Centro Tecnológico H2V Magallanes:** El Centro fue adjudicado al consorcio “Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes”, liderado por Fundación Chile, con el apoyo del Centro Tecnológico finlandés VTT, Enap, HNH, HIF, Consorcio Austral, Edelmag, Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez y otros. Cuenta con financiamiento del Programa DPS por \$6.000 millones.
- **Colaboración con instituciones de educación superior (IES):** Trabajo entre el gremio, las IES de la región y la Subsecretaría de Educación Superior, para fomentar la colaboración en temas de formación. Su objetivo es firmar convenios vinculantes entre empresas e IES en temas como ciclos de charlas, congresos, acceso a infraestructura, becas y facilidades de pago, entre otras.
- **Formación de capacidades locales para la industria:** Además de las medidas descritas anteriormente, se desarrolló un estudio sobre necesidades específicas de perfiles y de infraestructura para la formación en H2V en Magallanes

El traspaso de estos resultados a Sence y ChileValora se coordinó para asegurar el desarrollo de perfiles laborales y cursos pertinentes, junto con su respectivo financiamiento.

- **Infraestructura compartida:** Se ha apoyado a la Empresa Portuaria Austral en los procesos necesarios para la adecuación del Muelle Mardones, se han generado espacios de coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y con Enap, además se invirtieron \$480 millones en un Plan de Desarrollo Logístico para identificar necesidades de infraestructura portuaria y vial de uso público.
- **Convenio obras viales:** Se firmó un convenio marco que establece la normativa vigente y compromete al Ministerio de Obras Públicas a agilizar el proceso de aportes privados para acelerar los tiempos de obras viales priorizadas por la región y necesarias para el desarrollo de la industria de H2V en Magallanes.

En conjunto, todas estas medidas contribuyen, por una parte, a acelerar el despliegue de la industria y, por otra, a que su desarrollo ocurra con altos niveles de encadenamientos productivos, innovación y sostenibilidad, aumentando el valor que generará para el país.

4. Desarrollo del Litio

Chile ha sido un actor clave en la industria global del litio gracias al Salar de Atacama. Sin embargo, pese al auge mundial por la transición energética, el país llevaba tres décadas sin nuevos proyectos.

Para revertir esta tendencia y aprovechar la alta demanda futura, el gobierno lanzó en 2023 la Estrategia Nacional del Litio, que busca convertir este recurso en un motor de desarrollo integral, promoviendo nuevos proyectos con altos estándares socioambientales, mayor recaudación y fortalecimiento tecnológico, en línea con la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible.



El Ministerio de Economía participó activamente del diseño de esta estrategia. Sin embargo, su implementación requiere una gobernanza robusta, por lo que se creó el Comité de Litio y Salares, instancia interministerial liderada por el Ministerio de Minería e integrada por los Ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Ciencia y Corfo, encargada de coordinar y tomar decisiones estratégicas con apoyo permanente de equipos técnicos.

El marco jurídico chileno otorga al litio una condición particular desde 1979, clasificándolo como un mineral no concesible. Esto implica que su exploración y explotación están reservadas al Estado y a sus empresas, o a terceros mediante Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) o concesiones administrativas.

Esta estructura legal faculta al Estado para determinar dónde pueden desarrollarse proyectos y las condiciones que estos deben cumplir, lo que convierte a los contratos en un elemento clave de la implementación de la estrategia.

A la fecha, se encuentran otorgados, o esperando aprobación de la Contraloría General de la República, para otorgarse, los decretos que permitirán firmar cinco Contratos Especiales de Operación de Litio. Además, ingresarán nuevos a Contraloría durante 2026.

En paralelo al proceso de asignación de CEOLes, uno de los principales hitos de la estrategia ha sido el acuerdo entre Codelco y SQM, que se terminó de formalizar tras la creación de una nueva empresa, NovaAndino Litio –con participación mayoritaria del Estado–, que explotará el Salar de Atacama desde ahora en adelante.

El acuerdo permitió no sólo dar continuidad a esta operación de litio –clave para el mercado global del metal y para los ingresos fiscales del país– sino que, también, permitió adelantar inversiones para aumentar la producción, al mismo tiempo que se reduce la extracción de salmuera. El acuerdo se sustenta en contratos donde Corfo arrienda sus pertenencias mineras en el salar³.

Los contratos, tanto los de Codelco en Atacama como los nuevos CEOLes, tienen una serie de condiciones que permiten materializar los objetivos de la estrategia.

Existen cláusulas que favorecen mejores estándares de protección medioambiental, promueven el uso de nuevas tecnologías con menor impacto hídrico en los salares (extracción directa de litio y reinyección de salmuera, en vez de pozas de evaporación), generan espacios formales de participación de las comunidades, establecen aportes a Gobiernos Regionales y Locales (municipios), y a las Comunidades Indígenas; a la vez que promueven la agregación de valor, generan regalías para el Fisco, y permiten re-dirigir una parte de las rentas hacia inversiones que fomenten el Desarrollo Productivo Sostenible.

Esto último crea un círculo virtuoso donde el aporte del recurso no se limita a sus regalías, sino que contribuye a catalizar el desarrollo nacional en otros sectores.

Los fondos disponibles para investigación y desarrollo productivo en los actuales contratos Corfo ya han financiado una serie de iniciativas asociadas a tecnologías de extracción de litio, almacenamiento de energía, producción de litio metálico y recuperación de minerales desde residuos, así como proyectos en otras áreas, como el financiamiento de centros de supercómputo para inteligencia artificial y de proyectos de fabricación de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde.

En total, durante el actual período de gobierno se han comprometido aportes por más de US\$310 millones.

Otras medidas para impulsar capacidades tecnológicas y de conocimiento incluyen la creación del Instituto Nacional de Litio y Salar (INLiSa) en Antofagasta; y el financiamiento, vía ANID, de investigaciones sobre hidrología, biodiversidad y extremófilos con potencial biotecnológico, considerando el valor futuro de la biodiversidad en los salares.

La legitimidad social es clave para el éxito de la industria. La ENL incluyó un proceso participativo con comunidades y el Estado ha desarrollado cerca de veinte consultas indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT, a partir de las cuales se ha acordado generar distintos mecanismos de participación y seguimiento de los proyectos.

Por último, se trabaja en perfiles laborales con ChileValora y en normalización técnica con el INN, asegurando un crecimiento armónico y regulado.

Para acelerar la materialización de la industria, y convertir el recurso no renovable en bienestar permanente, el Programa DPS ha apoyado la implementación de la estrategia en distintas dimensiones.

³ Corfo posee pertenencias mineras en el Salar de Atacama que se rigen por las condiciones jurídicas previas a 1979. En la práctica, significa que Corfo puede arrendar directamente esas pertenencias para su explotación, lo que permite las actuales operaciones de Albemarle y NovaAndino Litio (previamente SQM).



En total, se han financiado \$12.000 millones en iniciativas vinculadas al sector entre 2023 y 2025, orientadas a generar información, capacidades institucionales, desarrollo tecnológico y avanzar en la entrega de nuevos contratos, incluyendo:

- Proceso de diálogo previo a las consultas indígenas (Ministerio de Minería).
- Consultas indígenas (Ministerio de Minería).
- Financiamiento de línea de base pública en Antofagasta y la plataforma que pondrá esta información a disposición (Ministerio del Medio Ambiente).
- Normativa en litio (INN).
- Estudio previo a informes técnicos justificatorios para definir la Red de Salares Protegidos (Ministerio del Medio Ambiente).
- Comité de litio y salares (Corfo).
- Diseño del Instituto Tecnológico y de Investigación Público del Litio y Salares (Corfo)
- Anillos temáticos en litio y salares (ANID)
- Proyecto del Fondo de investigación en salares (asignación rápida de ANID).
- Levantamiento de información tecnológica de patentes para un modelo de Desarrollo Productivo Sostenible para la industria del litio (Inapi).

5. Financiamiento para el desarrollo

Chile enfrenta el desafío de movilizar más inversión hacia innovación y tecnología, en un contexto donde las herramientas tradicionales suelen ser insuficientes para escalar soluciones y conectar la oferta innovadora con necesidades reales del país.

Con este diagnóstico se han fortalecido instrumentos existentes, como el Crédito Verde, y se diseñaron nuevos, como el Proyecto de Ley que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide) –iniciativa que, a enero de 2026, se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado–.

El fortalecimiento del Crédito Verde permite impulsar proyectos intensivos en sostenibilidad, eficiencia energética y reducción de emisiones, y en particular, podrá apoyar a proyectos de hidrógeno verde en etapas de preinversión. En caso de aprobarse, Afide será una nueva sociedad anónima –que nacerá de la separación de la Gerencia de Inversión y Financiamiento de la Corfo– la cual surge como respuesta a vacíos sistémicos del mercado financiero en materia de financiamiento de largo plazo y de alto riesgo, especialmente con altos componentes de innovación.

Su propósito es que ninguna iniciativa viable, y que cumpla con los criterios de sostenibilidad deseados, deje de desarrollarse por falta de financiamiento adecuado.

El diseño sigue las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo y supervisión financiera.

6.El futuro de la Manufactura en Chile

La manufactura ha tenido un rol protagónico en el desarrollo industrial de las regiones de Chile y es un pilar clave para diversificar la economía, generar empleos de calidad y fortalecer las cadenas productivas en los territorios.

Una industria manufacturera más sofisticada permite que el país deje de depender exclusivamente de la exportación de recursos naturales y avance hacia una economía basada en conocimiento, tecnología e innovación.

El documento “Futuro de la Manufactura en Chile: instrumentos de fomento y oportunidades de desarrollo” sistematiza la visión estratégica del Gobierno para el sector, identificando oportunidades para su desarrollo –incluyendo las asociadas a conectarse con las cadenas de valor del hidrógeno y del litio– y enumerando las diversas herramientas públicas existentes, en un ejercicio que se espera inicie un camino de mayor articulación.

Por otra parte, el “Plan de Fortalecimiento Industrial de Biobío” representa un ejemplo emblemático de apoyo al sector manufacturero. Lanzado en septiembre de 2024 como respuesta al cierre de la siderúrgica Huachipato, y fruto de un diálogo con sindicatos, empresas y gobiernos locales, contiene 32 medidas agrupadas en cinco ejes estratégicos que van desde la protección laboral inmediata hasta la reindustrialización futura, varias de las cuales se financian a través del Programa DPS.

En la misma línea de sofisticación industrial, se aprobó en 2025 la “Política Nacional de Construcción Naval”, también apoyada en varias de sus medidas por el Programa DPS. Esta política busca revitalizar los astilleros nacionales, liderados por ASMAR, para establecerlos como un sector estratégico que traccione la demanda por ingeniería, electrónica, metalmecánica y servicios técnicos avanzados. La iniciativa promueve el desarrollo de clústeres regionales, como el de defensa en Biobío o el de diseño naval en Los Ríos.



En definitiva, se busca posicionar la construcción naval como un motor de innovación y como un eje para el desarrollo en distintas regiones del país.

7. Capacidades en Regiones

Durante 2024 y 2025, se firmaron acuerdos con cuatro Gobiernos Regionales –Los Lagos, Los Ríos, Ñuble, y Metropolitano– para financiar en forma conjunta iniciativas que buscan instalar capacidades tecnológicas en las regiones, en áreas de coincidencia entre la Política Nacional DPS y las Estrategias Regionales de Desarrollo de las distintas regiones como, por ejemplo, el Centro Tecnológico de Economía Circular en la Región de Los Lagos y el Centro Tecnológico de Biotecnología para la Sostenibilidad en la Región de Los Ríos.

El financiamiento ha provenído de una combinación de recursos del Programa Desarrollo Productivo Sostenible y del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), instrumento creado en el marco de la Ley de Royalty Minero. Esta articulación ha permitido generar sinergias efectivas entre fondos, programas e instrumentos de política pública en el ámbito productivo de distintos niveles, tanto nacional como regional.

8. Otras iniciativas

Se financió la creación del Sistema de Compensación de Emisiones del impuesto verde, que establece mecanismos para que las fuentes afectas al impuesto puedan compensar emisiones mediante proyectos certificados de reducción o captura, fortaleciendo así los mercados de carbono.

El desarrollo de este sistema no solo contribuye a los objetivos climáticos del país, sino que también genera una señal clara al sector privado para invertir en tecnologías limpias, proyectos de eficiencia energética y soluciones basadas en la naturaleza. Además, permite canalizar recursos hacia iniciativas con impacto territorial y ambiental positivo.

La modernización del sistema de compras públicas, realizada a fines de 2023, abrió una nueva vía para impulsar la innovación utilizando la fuerza de demanda del propio Estado como motor de cambio tecnológico.

La introducción de mecanismos como Compra Pública de Innovación (CPI) permite mejorar la calidad de los servicios estatales y, a la vez, estimular la innovación en el sector privado.

En paralelo al desarrollo de la primera Política de Compra Pública de Innovación –plenamente alineada con la Política Nacional de Desarrollo Productivo Sostenible–, el Programa DPS financió dos pilotos de CPI: uno en el Hospital Las Higueras (2023), orientado a reducir tiempos de hospitalización mediante inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real; y otro con la Armada en Angostura Kirke (2024), para fortalecer la seguridad de la navegación con tecnologías de medición de corrientes marinas.

En octubre de 2025 se firmó el Acuerdo para la Descarbonización e Innovación en la Industria Minera, entre los Ministerios de Minería, Economía, Energía, Medio Ambiente y el Consejo Minero. Su objetivo es avanzar en la descarbonización de las operaciones mineras mediante una cooperación público-privada que acelere la adopción de medidas y tecnologías.

La iniciativa busca identificar y priorizar soluciones para reducir emisiones de alcance 1, 2 y 3, a través de una hoja de ruta que destaque oportunidades de innovación y desarrollo tecnológico dentro del sector.

Asimismo, pretende impulsar mejoras regulatorias que faciliten el testeo, la validación y el escalamiento de estas tecnologías, creando condiciones habilitantes para que la minería chilena avance hacia la carbono neutralidad al 2050.

El acuerdo establece un mecanismo innovador de colaboración entre el Estado y la industria minera que, respetando sus roles, permite impulsar una transición más decidida y ambiciosa hacia una minería baja en emisiones.

COMENTARIOS FINALES

Tras años de estancamiento, Chile vuelve a mostrar avances relevantes en productividad, que es un factor clave para crecer de manera sostenida y que se traduce en mejores salarios, mayor bienestar y más oportunidades.

Según el Informe Anual de Productividad 2025 de la CNEP, el país acumula dos años consecutivos de crecimiento positivo de la Productividad Total de Factores (PTF), algo que no ocurría desde 2011–2012. En 2024, la PTF creció 0,6% y para 2025 se proyecta un aporte similar, explicando cerca de una cuarta parte del crecimiento del PIB.

Este avance es especialmente relevante porque muestra que una parte significativa del crecimiento reciente no proviene solo de una mayor cantidad de trabajo o inversión, sino de mejoras reales en la eficiencia con que se utilizan los recursos productivos.

Detrás de este repunte pueden estar procesos de modernización productiva, mayor incorporación tecnológica, reorganización de procesos y un renovado dinamismo exportador, que abren espacio para un crecimiento de mejor calidad, con mayor valor agregado, más resiliente y con superiores bases que permiten avanzar en reducción de brechas y desarrollo inclusivo.

En este contexto, el conjunto de iniciativas impulsadas en el marco de la agenda DPS muestra cómo el Estado ha respondido de manera estratégica a un diagnóstico claro: una economía con productividad estancada, vulnerabilidades socioambientales y, al mismo tiempo, oportunidades históricas derivadas de la transición energética global.

Chile avanzó en delinear una estrategia orientada a transformar los desafíos de la necesaria transición energética en un motor de crecimiento sostenible, donde el hidrógeno verde y el litio se consolidan como plataformas estratégicas para avanzar hacia un desarrollo más intensivo en conocimiento.

Estos sectores no solo proyectan nuevas oportunidades productivas, sino que también han generado incentivos para que el conjunto de la economía transite hacia trayectorias que combinan mayor tecnología y productividad con menores impactos ambientales.

Si bien se trata de transformaciones de largo plazo, los avances logrados en los últimos años pueden sentar las bases de un nuevo ciclo de desarrollo, en el que la ciencia, la tecnología, la innovación y la sostenibilidad se integren de manera sistémica como fundamentos de la prosperidad futura del país, posicionando a Chile como un actor capaz de convertir las exigencias globales en un motor de desarrollo.

